



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ejecutivo Laboral
Radicación:	05001-31-05-013-2018-00767-01
Demandante:	Protección S.A.
Demandado:	Álvarez Ramírez Asociados S.A.S
Asunto:	Apelación sentencia que resuelve excepciones
Procedencia:	Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Excepción de prescripción aportes parafiscales

Medellín, febrero siete (07) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, contra la sentencia ejecutiva proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 28 de octubre de 2022, por medio de la cual se declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. en contra de la sociedad ÁLVAREZ RAMIREZ ASOCIADOS S.A.S. Radicado 05001-31-05-013-2018-00767-01.

1.- ANTECEDENTES

La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A., por conducto de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva laboral, en contra de la SOCIEDAD ÁLVAREZ RAMIREZ ASOCIADOS S.A.S., pretendiendo se libre mandamiento de pago por la suma de \$38.138.800, discriminada así: \$28.817.000, por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en pensión obligatoria , conforme al título ejecutivo anexo y la suma de \$9.321.800 por concepto de intereses de mora causados y no pagados hasta el 2 de octubre de 2018, más los intereses de mora que se causen a partir de la fecha del requerimiento prejurídico y hasta el pago de la obligación.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto proferido el 18 de diciembre del 2018, libró mandamiento de pago a favor de la ejecutante por la suma de \$28.817.000, por aportes pensionales obligatorios dejados de pagar en los periodos comprendidos entre enero de 2013 y julio de 2018; por la suma de \$9.321.800 por concepto de intereses de mora causados y no pagados sobre los aportes antes referidos, liquidados hasta el 02 de octubre de 2018; por los intereses de mora causados a partir del día siguiente a la fecha del requerimiento prejurídico, 03 de octubre de 2018 y hasta el pago efectuado en su totalidad.

Toda vez que no se logró la notificación de la sociedad accionada, se procedió a nombrar curador ad litem, mismo que dio respuesta a la demanda ejecutiva, oponiéndose a las pretensiones, formulando las excepciones de prescripción; pago; compensación e inexistencia de título ejecutivo respecto a capital e intereses moratorios.

2.- SENTENCIA DE DECISIÓN DE EXCEPCIONES

En audiencia pública celebrada el 28 de octubre de 2022, el Juzgado de conocimiento, profirió sentencia de conformidad con el numeral 3 del artículo 443 del Código General del Proceso, declarando probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones con los respectivos intereses causados con anterioridad al 11 de octubre de 2013, en los casos de los trabajadores José Arango García C.C. 3.362.195, Juan Estrada Estrada C.C. 15.402.296 y Aguilar Guevara C.C. 71.190.443; ordenó continuar la ejecución por los aportes al sistema de seguridad social en pensiones e intereses moratorios conforme el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, previstos en el título ejecutivo causados a partir del 11 de octubre de 2013 hasta julio de 2018, en los casos de los demás trabajadores relacionados en el anexo del título ejecutivo y condenó en costas a la ejecutada.

3.- RECURSO DE APELACION

El apoderado de Protección S.A., interpuso el recurso de apelación, indicando que el capital que se está reclamando es para la conformación de un derecho que tiene protección constitucional, derecho que mientras no se conforme no está sometido al fenómeno prescriptivo, considerando que debe revisarse el tema de prescripción, pues no existe disposición normativa que regule ésta frente a los aportes, pues el manejo que se ha dado del tema ha sido jurisprudencial.

4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos, no se pronunció ninguna de las partes.

5.- CONSIDERACIONES

5.1.- COMPETENCIA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

5.2.- PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a dirimir, radica en determinar:

¿Si es procedente revocar la sentencia ejecutiva proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, para en su lugar, declarar no probada la misma?

5.3.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual en el sublite operó el fenómeno prescriptivo parcialmente en relación a los trabajadores José Arango García C.C. 3.362.195, Juan Estrada Estrada C.C. 15.402.296 y Aguilar Guevara C.C. 71.190.443, respecto de los aportes causados con anterioridad al 11 de octubre de 2013, razón por la cual debe CONFIRMARSE la sentencia apelada, atendiendo a las siguientes razones:

5.4.- PREMISAS NORMATIVAS

Naturaleza del proceso ejecutivo laboral

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de

trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial, como en el asunto que se analiza.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.

En esta misma perspectiva el artículo 422 del código General del Proceso, establece:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

La excepción de prescripción

En esta Litis Protección S.A., pretende ejecutar, los aportes pensionales dejados de cancelar por el empleador Álvarez Ramírez, respecto de 25 trabajadores afiliados a la AFP, conforme al título ejecutivo N° 8075-18, visible a folios 13 a 23 del anexo 01 del expediente digital.

Dada la naturaleza parafiscal de los aportes pensionales, los mismos están sujetos a un término de prescripción especial, regulado en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que dispone:

“Artículo 817. Modificado por la Ley 788 de 2002, artículo 86. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. Inciso modificado por la Ley 1066 de 2006, artículo 8. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte”

A su vez el artículo 818 del mismo estatuto, reglamenta taxativamente los eventos de interrupción de la prescripción, en los siguientes términos:

“Artículo 818. Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 81. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta: -La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. -La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario. -El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario”

De acuerdo con la norma citada la interrupción de la prescripción opera en los siguientes supuestos fácticos:

- Por la notificación del mandamiento de pago,
- Por la suscripción de acuerdo de pago,
- Por la admisión de la solicitud de proceso de reorganización, reestructuración o liquidación judicial, y
- Por la declaración oficial de la liquidación forzosa administrativa”

En el sublite, argumenta la parte recurrente que los recursos que se persiguen tienen carácter de imprescriptible, teniendo en cuenta que el mismo contribuye a la conformación de un derecho que tiene protección constitucional, como lo es el derecho a la pensión, el cual mientras no se conforme no está sometido al fenómeno prescriptivo.

Postura que no comparte la Sala teniendo en cuenta que, como bien lo explicó la funcionaria de primer grado, los aportes pensionales tienen naturaleza de contribuciones parafiscales, por lo tanto, les es aplicable el Estatuto Tributario, y conforme al artículo 817 antes citado, el término de prescripción es de cinco (5) años. En esta dirección se ha manifestado el Consejo de Estado, en providencia del 19 de mayo de 2016, proferida dentro del proceso con radicado 08001-23-31-000-2009-00013-01

Y en igual sentido, lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisando que los aportes perseguidos por las administradoras de pensiones son prescriptibles, pues la exigibilidad de los mismos no puede presentarse en cualquier tiempo, al respecto, se indicó en sentencia STL 3387 de 2020:

“Ahora bien, con base en la normatividad referida, es innegable que el propósito del legislador no era el de dejar a discreción de las entidades administradoras de pensiones, el término para ejercer y adelantar la acción ejecutiva, como quiera que, primero, ello iría en contra de la misma eficiencia y

cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria y negligencia de la administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones, y eventualmente la misma pensión del trabajador.

Así las cosas, concluye esta Sala que la entidad administradora de pensiones, no puede hacer exigibles en cualquier tiempo, todos aquellos aportes que el empleador debió haber cotizado por efecto de las vinculaciones contractuales del afiliado durante toda su vida laboral, pues de aceptarse que la acción de cobro que debe adelantar la AFP frente al empleador moroso de los aportes al sistema general de pensiones, es de carácter imprescriptible, se desconocería la finalidad de las diferentes facultades de fiscalización, de control, acciones precoactivas y coactivas, otorgadas por el legislador a dichas entidades, a efectos de hacer efectivo el pago de los aportes por parte del patrono renuente.

Resulta relevante advertir, que no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la prescripción de sus aportes, sino la entidad administradora de pensiones, quien debe responder con su propio patrimonio por todos y cada uno de los aportes que dejó de cobrar en tiempo con su correspondiente rendimiento, o dicho en otras palabras, que dejó prescribir por su incuria o negligencia, tal como lo prevé el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 656 de 1994”.

Colofón de lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, pues es claro que la omisión de la entidad administradora de pensiones en ejercer oportunamente las acciones de cobro, conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, no tiene repercusiones en relación al posible derecho pensional del afiliado, no siendo el afiliado quien soporta las consecuencias que acarrea la declaratoria de prescripción de sus aportes, toda vez que el trabajador podrá reclamarlos en cualquier tiempo y el Fondo Pensional, debe dar aplicación a la línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la inclusión de semanas en mora.

Corolario de lo antes planteado, encuentra la Sala acertada la decisión de la a quo al declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, en relación

al capital y los intereses correspondientes a los aportes de los trabajadores identificados en el título ejecutivo como Arango García José, Estrada Estrada Juan y Aguilar Guevara, causados con anterioridad al 11 de octubre de 2013, advirtiéndole que si bien la funcionaria tomó el requerimiento de que trata el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, como una manifestación de pago a efectos de interrumpir la prescripción, alcance que no es compartido por esta Colegiatura, dicho aspecto no fue objeto de reparo y en tal sentido no se efectuará pronunciamiento de fondo.

Se sigue de lo anterior, confirmar la providencia objeto de recurso.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$580.000.

6.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley:

FALLA

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia ejecutiva proferida el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A. en contra de la SOCIEDAD ÁLVAREZ RAMIREZ ASOCIADOS S.A.S

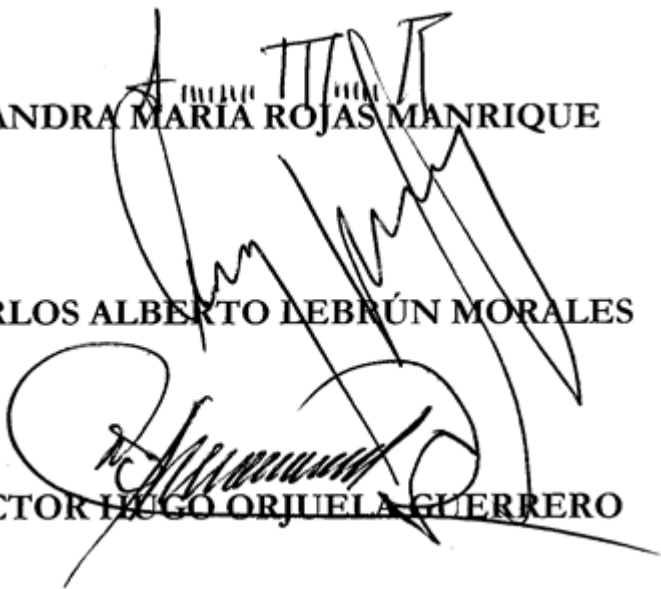
.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho la suma de \$580.000 moneda legal.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO